La UE investiga un posible cártel de fabricantes de coches alemanes

BRUSELAS. La Comisión Europea está investigando la pre-sunta existencia de un cártel de fabricantes alemanes de vehículos a motor en colaboración con la autoridad alemana competente. De demostrarse, las multas que fija la UE por este tipo de prácticas podrían alcanzar hasta el 10% del volumen total de negocio.

La revista 'Der Spiegel' informó de que Volkswagen, BMW, Audi y Porsche podrían haber llegado a un acuerdo para fijar los precios de los sistemas de tratamiento de las emisiones de sus vehículos diésel. mediante la creación de comités industriales secretos. Según una carta enviada a las autoridades de competencia, 200 empleados de esas compañías se reunieron en 60 comités con la intención de discutir sobre aspectos como el desarrollo del vehículo o motores de gasolina y diésel.

REUTERS/EP

AGRICUITURA

Curso sobre el manejo del azafrán en Teruel

La Universidad de Verano de Teruel-Fundación Antonio Gargallo ha organizado, junto con el Centro de Estudios del Jiloca y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), el curso El azafrán: manejo del cultivo y de la especia', que tendrá lugar en Monreal del Campo (Teruel), del 22 al 24 de septiembre. La investigadora del CITA y especialista en el es-tudio del azafrán, Ana María Sánchez Gómez, es la directora del curso. Esta explicó ayer, el objetivo es «dar respuesta a las cuestiones importantes del manejo del cultivo, procesado, comercialización, calidad y uso del azafrán».

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

UGT urge a un acuerdo con la CEOE antes de agosto

El secretario general de UGT. Pepe Álvarez, advirtió ayer de que si las negociaciones con la ĈEOE respecto al Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva no culminan de forma favorable antes de que finalice julio, se dejaría atrás el de este año y se iniciarían en septiembre las conversaciones para el de 2018. Así lo destacó Álvarez en su blog, donde indicó que «no tendría sentido ir más allá de julio», imponiendo así un ultimátum a la patronal.

El número de empleados públicos ha bajado en 172.816 desde los ajustes

 Desde el año 2010 hasta ahora la Administración central ha perdido casi el doble de efectivos que la autonómica

MADRID. En mayo de 2010 el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció desde la tribuna del Congreso una serie de recortes ante las primeras amenazas de rescate de España. Una de esas medidas fue la bajada del sueldo de los funcionarios una media del 5%. Desde entonces los ajustes para los empleados públicos se fueron incrementando a la par que la situación económica se deterioró. En 2012, ya con Mariano Rajoy en la Moncloa, se suprimió una paga extra de Navidad y llegó la tasa de reposición cero (salvo algunas excepciones como los cuerpos de seguridad del Estado). Esto produjo un descenso del personal. De esta forma, a pesar de la mejora económica de los últimos años, el número de empleados públicos es todavía un 6,4% inferior al que había antes de los aiustes que se iniciaron en 2010. Esto supone 172.861 trabajadores menos que hace siete años, según el último informe de personal de la administración difundido por Hacienda.

En enero de 2017 la plantilla de empleados del conjunto de las administraciones públicas se situó en 2.523.167. Es la segunda cifra más baja desde el comienzo de la crisis en 2008, solo empeorada por los datos de 2016. Sin embargo, no todos los organismos sufren los recortes por igual. De hecho, la administración estatal ha perdido desde 2010 casi el doble de efectivos que la autonómica (69.147 frente a 38.534).

A comienzos de 2017 la plantilla dependiente del Estado era un 11,8% inferior a la de 2010. El mayor recorte de personal está en los propios ministerios con una reducción del 20,9% de sus efectivos hasta situarse en poco más de 105.000. También los de la Seguridad Social son un 12,8% inferiores en 2017 que hace siete años.

El informe pone de manifiesto

que la Agencia Tributaria cuenta con un 9,6% menos de personal que en 2010. Un recorte que tanto el Sindicatos de Técnicos de Ha-cienda (Gestha) como la Organización de Inspectores de Hacienda han criticado. El Gobierno aprobó hace unas semanas una oferta de empleo extraordinaria de 2.150 trabajadores para reforzar la plantilla, algo que desde los sindicatos consideran «insuficiente».

Pero no todas las áreas han sufrido los recortes con intensidad. Algunas, como las fuerzas de seguridad del Estado quedaron al margen de la tasa de reposición cero. En cualquier caso la administración central solo es una parte del total. De hecho, más de la mitad de los empleados públicos corresponden a organismos dependientes de las regiones (51%), algo lógico si se tiene en cuenta que de ellas dependen dos pilares básicos del sistema de bienestar como son la educación y la sanidad. Así, el número de trabajadores de esta administración se situó a inicios de 2017 en 1.307.358. Es decir, un 2,8% menos que en 2010.

DAVID VALERA



Dos agricultores aplicando herbicidas, HERALDO

El campo aragonés perdería 130 millones de euros si se prohibiera el glifosato

ZARAGOZA. El glifosato es el herbicida más usado en el mun-do, y por extensión en Aragón, donde además su presencia está muy extendida por la importan-cia del cultivo de cereales en la Comunidad. Esta sustancia activa supone, según informan fuentes del sector agrario, «una herramienta básica para muchos agri-cultores», y ahora, un informe realizado por una consultora y amparado por varias asociaciones proclives a su uso ha cuantificado el coste que tendría su prohibición. En total, según la consultora Price WaterHouse Cooper, la eliminación del glifosato supondría en España una pérdida del 10% de la producción. Esto, trasladado a los datos aragoneses -donde en 2016 la agricultura generó 1.314 millones de euros-, supondría la pérdida de algo más de 130 millones en rendimiento para los agricultores.

Los motivos a los que alude el informe para argumentar esta pérdida están en el aumento de la carga de trabajo para los agricultores, que deberían realizar más acciones de laboreo en sus campos para impedir que crezcan malas hierbas en terrenos en barbecho, además de aumentar su gasto al acudir a sustancias más caras.

El auge y caída del glifosato responde a varias dudas sobre sus posibles afecciones sobre la salud humana y la biodiversidad. Dudas que, no obstante, la UE aún no ha conseguido probar al encargar varios informes que han

dado conclusiones enfrentadas. El glifosato fue patentado en 1974 por la multinacional Monsanto, siendo parte fundamental de su compuesto RoundUp, el más comercializado del mundo. En 2000, la licencia expiró, dando entrada a nuevas marcas. Su uso ha ido creciendo de forma paula-tina hasta que en 2015 la OMS lo calificó como «probablemente cancerígeno». Una clasificación que fue rechazada por Monsanto v varias organizaciones agrarias.

A partir de este dictamen la oposición al uso del glifosato creció. En Zaragoza por ejemplo, al igual que en Madrid y Barcelona, su uso está prohibido en parques y jardines. Las Cortes de Aragón

aprobaron hace un año una proposición para limitar su uso

A nivel europeo, la Comisión Europea pidió información a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que en 2016 emitió un informe indicando que «es improbable que el glifosato sea genotóxico (provoque daños en el ADN) o suponga una amenaza de cáncer para los humanos». El Parlamento Europeo aprobó una proposición pendiente de validación por los Estados miembros para autorizar el glifosato durante 7 años más (en lugar de los 15 que se suele hacer), pero restringiendo su uso solo a profesiona-les y desaconsejando su utilización en espacios públicos.

Con solo seis meses para saber si la Comisión extiende aún más el uso del producto, en abril de este año se publicó un nuevo informe solicitado por Bruselas para tener mayor seguridad, esta vez realizado por la Agencia Europea de Substancias Químicas, que también afirma que no hay evidencias científicas de que el polémico herbicida sea cancerígeno. A comienzos de este mes representantes de Alianza para una Agricultura Sostenible, organización europea en la que se integran sindicatos con presencia en Aragón como Asaja o UPA, solicitaron al comisario europeo de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, que la UE renueve la licencia del herbicida glifosato. De esa opinión es Francisco Ponce, secretario provincial de UAGA en Zaragoza. «El problema del glifosato es que no se ha encontrado un producto que pueda ser sustitutivo al mismo precio. Si se prohibiera, habría que acudir a otros productos o hacer muchas más laores, con el consiguiente coste en horas de trabajo y recursos económicos», dice. Aun con todo, reivindica su uso responsable.

VÍCTOR MILLÁN